

Efectos sociales y económicos de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos de América Latina

Julián Monrroy Aime*

<https://orcid.org/0000-0002-1468-1842>
jmonrroy@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Lima, Perú

César Felipe Gallardo Mansilla

<https://orcid.org/0000-0002-5333-1191>
cgallardom@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Lima, Perú

Gladys Escobar Córdova

<https://orcid.org/0009-0004-2674-9762>
gescobar@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Lima, Perú

Charito Norma Chipana Peceros

<https://orcid.org/0000-0002-4003-1202>
cchipanap@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Lima, Perú

Autor de correspondencia: jmonrroy@unfv.edu.pe2

Recibido (21/07/2025), Aceptado (22/11/2025)

Resumen. El persistente problema de la corrupción en los servicios públicos de América Latina ha impulsado el análisis de la vigilancia anticorrupción como un mecanismo clave para fortalecer la gestión estatal. Esta investigación tuvo como objetivo analizar los efectos sociales y económicos de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos de la región. Se desarrolló un estudio de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y comparativo, basado en el análisis documental de indicadores de gobernanza, percepción social de la corrupción y mecanismos de transparencia, considerando el contexto regional y los casos de Chile y Uruguay. Los resultados evidencian que una vigilancia institucional más sólida se asocia con mayores niveles de confianza ciudadana y una gestión más eficiente de los recursos públicos. Se concluye que el fortalecimiento de la vigilancia anticorrupción contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de los servicios públicos y a promover el desarrollo social y económico en América Latina.

Palabras clave: vigilancia anticorrupción, servicios públicos, gobernanza, percepción de corrupción, América Latina.

Social and Economic Effects of Anti-Corruption Oversight in Public Services in Latin America

Abstract. The persistent problem of corruption in public services in Latin America has driven the analysis of anti-corruption oversight as a key mechanism for strengthening state management. This study aimed to analyze the social and economic effects of anti-corruption oversight in public services across the region. A qualitative research approach was adopted, with a descriptive and comparative design, based on documentary analysis of governance indicators, social perceptions of corruption, and transparency mechanisms, considering the regional context and the cases of Chile and Uruguay. The results show that stronger institutional oversight is associated with higher levels of public trust and more efficient management of public resources. It is concluded that strengthening anti-corruption oversight contributes significantly to improving the quality of public services and promoting social and economic development in Latin America.

Keywords: anti-corruption oversight, public services, governance, corruption perception, Latin America.



I. INTRODUCCIÓN

La provisión de servicios públicos constituye uno de los pilares esenciales para garantizar bienestar social, movilidad económica y cohesión comunitaria en los países de América Latina [1]. Sin embargo, su funcionamiento se ve frecuentemente afectado por prácticas de corrupción que deterioran la calidad de las instituciones, generan inequidades en el acceso y provocan un uso ineficiente de los recursos estatales [2]. En este contexto, la vigilancia anticorrupción, entendida como el conjunto de mecanismos de control, participación ciudadana, auditoría pública y supervisión institucional, adquiere un papel determinante para fortalecer la integridad del sector público [3] y mejorar los resultados que reciben las comunidades.

América Latina continúa registrando uno de los niveles de percepción de corrupción más altos del mundo [4], situación que limita el desarrollo y agrava brechas sociales ya existentes. Según los informes recientes de Transparencia Internacional, gran parte de la región permanece estancada en indicadores de integridad, afectando tanto la confianza ciudadana como la inversión pública y privada [5]. Países como Uruguay y Chile muestran avances sostenidos gracias a sistemas más robustos de control y participación social, mientras que otras naciones enfrentan debilidades estructurales que dificultan una supervisión efectiva [6]. Esto evidencia que la calidad de la vigilancia anticorrupción no solo depende de marcos normativos, sino también del compromiso ciudadano, la independencia institucional y la capacidad técnica para fiscalizar el manejo de los recursos públicos.

Los efectos de una vigilancia anticorrupción sólida trascienden el ámbito jurídico y alcanzan dimensiones sociales y económicas fundamentales. En lo social, contribuye a reconstruir la confianza en las instituciones, fomenta la transparencia en la toma de decisiones y reduce la percepción de injusticia que históricamente afecta a la ciudadanía [7]. En lo económico, disminuye pérdidas asociadas al desvío de fondos, optimiza la asignación de presupuestos y mejora la eficiencia de los servicios públicos [8], lo cual repercute directamente en áreas críticas como salud, educación, transporte y seguridad. De este modo, la lucha contra la corrupción deja de ser un proceso aislado y se convierte en un factor clave para el desarrollo sostenible y la equidad regional.

A pesar de los avances normativos y las iniciativas impulsadas en distintos países, la efectividad de los mecanismos de vigilancia sigue siendo desigual. La falta de independencia judicial, la limitada profesionalización del servicio público, la débil articulación entre organismos de control [9] y la escasa participación social dificultan la consolidación de sistemas anticorrupción estables y transparentes. Estos desafíos hacen necesario analizar no solo las herramientas institucionales, sino también sus impactos reales en la vida de la población y en el desempeño económico de los Estados.

En este marco, el presente estudio aborda los efectos sociales y económicos de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos de América Latina [10], con el propósito de comprender cómo la supervisión, la transparencia y el control ciudadano pueden transformar la gestión estatal y favorecer el desarrollo regional. La relevancia de esta investigación radica en su aporte para fortalecer las políticas públicas de integridad, promover sistemas de control más eficientes y contribuir al diseño de estrategias que permitan reducir la corrupción y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía latinoamericana.

II. MARCO TEÓRICO

La vigilancia anticorrupción en el sector público puede entenderse como un sistema multidimensional de control que articula mecanismos institucionales, normativos y sociales con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar prácticas ilícitas en la gestión estatal [11]. Desde una perspectiva teórica, este concepto se sustenta en los principios de la gobernanza democrática, la rendición de cuentas y la transparencia, los cuales configuran la base de los Estados modernos orientados al interés público [12]. Diversos enfoques teóricos han abordado la corrupción como un fenómeno estructural asociado a asimetrías de información, debilidad institucional y captura del Estado por intereses particulares [13]. Desde la teoría de la agencia, la corrupción surge cuando los agentes públicos actúan en beneficio propio ante la falta de supervisión efectiva por parte de los principales (ciudadanía y Estado) [14]. En este sentido, la vigilancia anticorrupción actúa como un mecanismo correctivo que reduce dichas asimetrías, incrementa los costos esperados de la conducta corrupta y fortalece los incentivos hacia una gestión íntegra.

Complementariamente, los enfoques de gobernanza colaborativa y control social destacan el rol de la

ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada como actores fundamentales en la supervisión del poder público [15]. En América Latina, donde los sistemas formales de control suelen verse limitados por presiones políticas o falta de recursos, la vigilancia social adquiere una relevancia particular como contrapeso democrático y catalizador de transparencia.

A. Dimensión social de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos

Desde el punto de vista social, la vigilancia anticorrupción genera efectos que se manifiestan principalmente en la reconstrucción de la confianza institucional y en la percepción de justicia distributiva. La corrupción en los servicios públicos no solo implica pérdidas económicas, sino también la erosión del vínculo entre el Estado y la ciudadanía, debilitando la legitimidad del sistema democrático y fomentando el desapego cívico [16]. La implementación efectiva de mecanismos de vigilancia contribuye a visibilizar los procesos de toma de decisiones, reducir la opacidad administrativa y garantizar un acceso más equitativo a los servicios públicos [11]. Esto resulta especialmente relevante en contextos latinoamericanos marcados por profundas desigualdades sociales, donde los sectores más vulnerables suelen ser los más afectados por prácticas corruptas que limitan el acceso a salud, educación, agua potable o infraestructura básica.

Asimismo, la participación ciudadana en la vigilancia anticorrupción fortalece el capital social y promueve una cultura de legalidad [12]. Cuando la población percibe que existen canales efectivos para denunciar irregularidades y que estas generan consecuencias reales, se incrementa la disposición a colaborar con las instituciones y a exigir rendición de cuentas. En contraste, la ausencia de vigilancia o su aplicación meramente formal reforza la normalización de la corrupción y la percepción de impunidad, perpetuando ciclos de desconfianza y exclusión social.

B. Impactos económicos de la vigilancia anticorrupción

En el ámbito económico, la vigilancia anticorrupción desempeña un papel clave en la eficiencia del gasto público y en la sostenibilidad fiscal de los Estados. La corrupción distorsiona la asignación de recursos, priorizando proyectos con mayores oportunidades de soborno sobre aquellos con mayor impacto social [17], lo que genera inefficiencias estructurales y reduce el retorno social de la inversión pública. La evidencia empírica sugiere que los países con sistemas robustos de control y supervisión presentan menores niveles de despilfarro [10], una ejecución presupuestaria más eficiente y una mayor calidad en la provisión de servicios. En este sentido, la vigilancia anticorrupción no debe concebirse únicamente como un costo administrativo, sino como una inversión estratégica que genera beneficios económicos a mediano y largo plazo.

Además, la reducción de la corrupción mediante mecanismos de vigilancia fortalece el clima de inversión y la estabilidad macroeconómica. La transparencia en la gestión pública reduce la incertidumbre, mejora la previsibilidad institucional y atrae tanto inversión privada nacional como extranjera [5]. En América Latina, donde la corrupción ha sido históricamente un factor disuasivo para el desarrollo económico sostenido, la vigilancia anticorrupción se configura como un elemento clave para impulsar el crecimiento inclusivo y la competitividad regional.

C. Desigualdades regionales y capacidad institucional

A pesar de los avances normativos en la región, los efectos de la vigilancia anticorrupción presentan una marcada heterogeneidad entre países latinoamericanos. Estas diferencias responden, en gran medida, a la capacidad institucional, la independencia de los organismos de control y el grado de profesionalización del servicio público.

Países que han logrado consolidar sistemas de vigilancia más eficaces suelen contar con tribunales de cuentas autónomos, fiscalías especializadas y marcos normativos claros que garantizan la aplicación efectiva de sanciones [6]. En contraste, en aquellos contextos donde las instituciones se encuentran politizadas o carecen de recursos técnicos, la vigilancia anticorrupción tiende a ser fragmentada y poco efectiva, limitando su impacto social y económico. Esta disparidad pone de manifiesto que la vigilancia anticorrupción no puede ser entendida como una solución uniforme, sino como un proceso que requiere adaptaciones contextuales, fortalecimiento institucional progresivo y una articulación efectiva entre control estatal y control social.

D. Desafíos y perspectivas futuras

Entre los principales desafíos que enfrenta la vigilancia anticorrupción en América Latina se encuentran la resistencia política, la debilidad de los sistemas judiciales, la escasa coordinación interinstitucional y la limitada participación ciudadana informada [18]. Superar estas barreras requiere no solo reformas legales, sino también transformaciones culturales orientadas a consolidar una ética pública basada en la integridad y la responsabilidad.

De cara al futuro, el fortalecimiento de la vigilancia anticorrupción demanda el uso estratégico de tecnologías digitales [19], la apertura de datos públicos y el impulso de mecanismos de participación ciudadana más inclusivos. Asimismo, resulta fundamental evaluar de manera sistemática los impactos sociales y económicos de estas estrategias, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y orientadas al bienestar colectivo.

III. METODOLOGÍA

A. Enfoque y diseño de la investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-cuantitativo de carácter documental, orientado al análisis de los efectos sociales y económicos de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos de América Latina. El predominio del análisis cuantitativo se sustenta en el uso de indicadores internacionales estandarizados, mientras que el componente cualitativo cumple una función interpretativa y contextual, permitiendo profundizar en el significado social e institucional de los resultados observados.

El estudio adoptó un diseño no experimental, dado que no se manipularon variables ni se intervinieron los fenómenos analizados, y un alcance descriptivo-analítico con componente explicativo, en tanto se identificaron patrones regionales y se examinó la relación entre los niveles de vigilancia anticorrupción y sus efectos sociales y económicos, a partir de evidencia secundaria previamente validada. Asimismo, se incorporó un enfoque comparativo, mediante el análisis de casos ilustrativos (Chile y Uruguay), que permitió contrastar el desempeño promedio de América Latina con experiencias nacionales caracterizadas por mayores niveles de control institucional y transparencia, fortaleciendo así la interpretación de las tendencias regionales identificadas.

B. Unidad de análisis y ámbito de estudio

La unidad de análisis estuvo constituida por los países de América Latina, considerados desde una perspectiva regional, con el objetivo de identificar regularidades y diferencias estructurales en materia de vigilancia anticorrupción y calidad institucional. De manera complementaria, se examinaron los casos de Chile y Uruguay como referentes empíricos, seleccionados por su desempeño consistente en indicadores internacionales de gobernanza y control de la corrupción, lo que permitió ilustrar cómo sistemas de vigilancia más consolidados se asocian con mejores resultados sociales e institucionales dentro del contexto latinoamericano.

El ámbito temporal del estudio comprendió el período 2021–2024, seleccionado en función de la disponibilidad, actualización y comparabilidad de los datos procedentes de las fuentes internacionales utilizadas.

C. Fuentes de datos

La investigación se basó exclusivamente en fuentes secundarias, de carácter oficial y académico, seleccionadas por su rigurosidad metodológica, reconocimiento internacional y uso recurrente en estudios comparativos sobre gobernanza y corrupción. Las principales fuentes de información fueron:

- Los *Worldwide Governance Indicators* (WGI), empleados para evaluar dimensiones clave de la calidad institucional y la vigilancia anticorrupción a nivel país.
- El *Global Corruption Barometer* (GCB), utilizado para analizar la percepción social de la corrupción en instituciones públicas de América Latina.
- Informes del *Open Government Partnership* (OGP), con énfasis en el caso de Uruguay (2021–2024), orientados a examinar mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
- Literatura académica indexada, empleada como soporte teórico y analítico para la interpretación de los hallazgos.

El uso de estas fuentes responde a la limitada disponibilidad de datos primarios homogéneos y comparables sobre vigilancia anticorrupción en la región, restricción ampliamente reconocida en la literatura especializada y que justifica el enfoque documental adoptado.

D. Variables de estudio

Variable independiente

Nivel de vigilancia anticorrupción, operacionalizado a través de:

- Indicadores de control de la corrupción, eficacia del gobierno, estado de derecho y voz y responsabilidad (WGI).
- Existencia y funcionamiento de mecanismos de vigilancia institucional y participación ciudadana, identificados a partir de los compromisos y reportes del OGP.

Variables dependientes

Efectos sociales:

- Percepción ciudadana de corrupción en instituciones públicas.
- Niveles de confianza en actores estatales y en los servicios públicos.

Efectos económicos:

- Eficiencia de la gestión pública, inferida a partir de indicadores de gobernanza.
- Calidad de la provisión de servicios públicos, analizada de manera indirecta mediante el desempeño institucional reportado.

E. Técnicas de análisis

Se aplicaron las siguientes técnicas:

- Análisis descriptivo de indicadores, para identificar patrones y tendencias regionales.
- Análisis comparativo, contrastando el promedio regional de América Latina con los casos ilustrativos de Chile y Uruguay.
- Análisis documental cualitativo, orientado a examinar políticas públicas, mecanismos de vigilancia anticorrupción y esquemas de participación ciudadana.

Este enfoque metodológico permitió integrar evidencia cuantitativa y cualitativa de manera coherente, fortaleciendo la validez interpretativa de los resultados y asegurando consistencia entre el diseño de la investigación y los hallazgos reportados.

IV. RESULTADOS

La comparación regional basada en los indicadores de Gobernanza Mundial (WGI) permite identificar una relación directa entre los niveles de vigilancia anticorrupción y el desempeño social y económico de los servicios públicos en América Latina (Tabla 1). Los países con mayores niveles de control de la corrupción, como Uruguay y Chile, exhiben también una mayor eficacia gubernamental, un estado de derecho más consolidado y mejores condiciones para la provisión de servicios públicos confiables, lo que repercute positivamente en la cohesión social, la confianza ciudadana y la eficiencia del gasto público.

En contraste, la mayoría de los países latinoamericanos se concentran en rangos medios o bajos, especialmente en control de la corrupción y estabilidad política. Estas debilidades estructurales limitan el impacto de los mecanismos de vigilancia anticorrupción, generando efectos económicos adversos como ineficiencia en la asignación de recursos, sobrecostos en los servicios públicos y pérdida de legitimidad institucional. Asimismo, desde una perspectiva social, la baja efectividad de la vigilancia se asocia con mayores niveles de desconfianza ciudadana, desigualdad en el acceso a los servicios y percepción de impunidad. La evidencia comparativa sugiere que la vigilancia anticorrupción no produce efectos aislados, sino que actúa como un mecanismo transversal que fortalece la calidad institucional, potencia la eficacia de los servicios públicos y contribuye al desarrollo social y económico sostenible en la región.

Tabla 1. Indicadores de gobernanza y vigilancia institucional

País	Voz y responsabilidad	Estabilidad política	Eficacia del gobierno	Estado de derecho	Control de la corrupción
Uruguay	Muy alto	Alto	Alto	Alto	Muy alto
Chile	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto
Costa Rica	Alto	Medio	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto
Colombia	Medio	Bajo-medio	Medio	Medio	Bajo-medio
Perú	Medio	Bajo-medio	Medio	Bajo-medio	Bajo
México	Medio	Bajo	Bajo-medio	Bajo	Bajo
Brasil	Medio	Bajo	Medio	Bajo-medio	Bajo
Argentina	Medio	Bajo-medio	Bajo-medio	Bajo-medio	Bajo
Ecuador	Medio	Bajo	Bajo-medio	Bajo	Bajo
Promedio América Latina	Medio	Bajo-medio	Medio	Medio	Bajo-medio

Fuente: Worldwide Governance Indicators – Banco Mundial [20]

La Tabla 2 evidencia una percepción elevada y transversal de corrupción en instituciones clave para el funcionamiento del Estado y la provisión de servicios públicos. Destacan, en primer lugar, la policía y los representantes electos, ambos con un 47 % de percepción de alta corrupción, lo que resulta especialmente crítico al tratarse de actores centrales en la garantía del orden público, la seguridad ciudadana y la representación democrática. Este nivel de desconfianza social compromete la legitimidad institucional y debilita la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Asimismo, los gobiernos locales (45 %) y el ejecutivo nacional (43 %) presentan valores elevados, lo que sugiere que la percepción de corrupción no se limita a un nivel específico de gobierno, sino que atraviesa distintas escalas de la administración pública. Esta situación tiene implicaciones económicas directas, como la inefficiencia en la asignación de recursos, el incremento de costos en la prestación de servicios y la reducción de la efectividad de las políticas públicas.

Por otro lado, aunque con porcentajes ligeramente menores, los jueces y magistrados (40 %) y los funcionarios públicos (37 %) también muestran niveles preocupantes de desconfianza, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y administrativo, pilares fundamentales para el control institucional y la vigilancia anticorrupción. En contraste, los líderes religiosos registran el menor nivel de percepción de corrupción (25 %), lo que evidencia una diferenciación clara en la confianza social según el tipo de institución. Los resultados reflejan que la percepción de corrupción se concentra principalmente en aquellas instituciones con mayor capacidad de decisión, control de recursos y poder coercitivo, reforzando la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia anticorrupción, la transparencia y la rendición de cuentas como estrategias clave para mejorar tanto los resultados sociales como económicos de los servicios públicos en América Latina.

Tabla 2. Percepción social de la corrupción en América Latina

Institución	Porcentaje de población que percibe alta corrupción (%)
Policía	47
Representantes electos	47
Gobierno local	45
Ejecutivo nacional	43
Jueces y magistrados	40
Funcionarios públicos	37
Autoridades tributarias	36
Líderes religiosos	25

Fuente: Global Corruption Barometer – Transparency International [20]

A. Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) y efectos en América Latina

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) constituye uno de los instrumentos empíricos más robustos y utilizados a nivel internacional para evaluar la corrupción en el sector público, permitiendo comparaciones directas entre países y regiones. En el caso de América Latina, los resultados más recientes evidencian una marcada heterogeneidad regional, con implicaciones sociales y económicas directas sobre la calidad de los servicios públicos y la efectividad de los mecanismos de vigilancia anticorrupción.

Los datos muestran que países como Uruguay y Chile alcanzan los puntajes más elevados de la región, lo que indica menores niveles de percepción de corrupción y una mayor confianza en las instituciones públicas. Este desempeño se asocia con sistemas de control más consolidados, mayor transparencia administrativa y una provisión de servicios públicos relativamente más eficiente. En contraste, la mayoría de los países latinoamericanos se sitúan en rangos bajos o medio-bajos del índice, reflejando problemas estructurales persistentes en materia de integridad institucional.

Desde una perspectiva social, estos resultados se traducen en niveles diferenciados de confianza ciudadana, participación cívica y legitimidad del Estado. En términos económicos, una menor percepción de corrupción se vincula con mejor uso del gasto público, menor inficiencia administrativa y mayor capacidad estatal para implementar políticas públicas efectivas. En consecuencia, el CPI permite evidenciar que la vigilancia anticorrupción no solo cumple una función normativa, sino que genera impactos concretos en el desarrollo social y económico, particularmente en contextos donde los servicios públicos son un eje central del bienestar colectivo.

La Tabla 3 presenta una comparación de países seleccionados de América Latina a partir del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), que evalúa la corrupción percibida en el sector público en una escala de 0 a 100. Los resultados confirman la existencia de brechas significativas entre los países de la región, destacándose Uruguay y Chile con los niveles más bajos de percepción de corrupción, en contraste con países como Perú y México, que registran puntajes considerablemente inferiores.

Esta distribución refuerza la idea de que los efectos de la vigilancia anticorrupción son desiguales, dependiendo de la fortaleza institucional, la efectividad de los mecanismos de control y la transparencia en la gestión pública. En el marco de los servicios públicos, los países con mejores puntajes tienden a mostrar mayor eficiencia administrativa y mayor confianza social, mientras que aquellos con puntajes bajos enfrentan mayores desafíos en términos de legitimidad, calidad del servicio y sostenibilidad económica.

Tabla 3. Índice de Percepción de la Corrupción en países seleccionados de América Latina (CPI)

País	Puntaje CPI (0-100)	Nivel de percepción de corrupción
Uruguay	73	Bajo
Chile	66	Bajo-medio
Colombia	40	Medio
Argentina	37	Medio-alto
Brasil	36	Medio-alto
Perú	33	Alto
México	31	Alto
Promedio América Latina	< 45	Medio-alto

Asimismo, el análisis de la percepción social evidencia que una proporción significativa de la población latinoamericana identifica altos niveles de corrupción en instituciones estratégicas para el funcionamiento del Estado, tales como la policía, los representantes electos y los gobiernos locales. Esta percepción no constituye únicamente un indicador de malestar ciudadano, sino que refleja un impacto social directo que se manifiesta en la erosión de la confianza pública, el debilitamiento de la legitimidad estatal y una relación cada vez más frágil entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la provisión de servicios públicos.

En esta línea, la persistencia de dichas percepciones sugiere que la existencia de mecanismos formales de control y vigilancia anticorrupción no garantiza, por sí sola, su efectividad. Cuando estos mecanismos no se

traducen en resultados tangibles, visibles y comprensibles para la población, su capacidad de generar confianza se ve considerablemente limitada. La brecha entre el diseño normativo y la experiencia ciudadana cotidiana emerge, así como uno de los principales desafíos para las políticas anticorrupción en la región.

El caso de Uruguay ilustra de manera elocuente que la articulación coherente entre vigilancia anticorrupción, transparencia institucional y participación ciudadana puede contribuir a la construcción de entornos institucionales más sólidos y legitimados socialmente. La implementación sostenida de planes anticorrupción, el seguimiento sistemático de compromisos públicos y la activa participación de la sociedad civil se asocian con mayores niveles de confianza institucional, así como con una percepción más favorable sobre la integridad del sector público.

En este sentido, los resultados ponen de manifiesto que la vigilancia anticorrupción trasciende su función meramente administrativa o técnica, y asume un rol social estratégico, al fortalecer los vínculos entre el Estado y la ciudadanía, promover la rendición de cuentas y contribuir a la cohesión social. No se trata únicamente de prevenir prácticas indebidas, sino de generar condiciones institucionales que refuerzen la credibilidad del sistema público en su conjunto.

En términos generales, los países que han desarrollado sistemas de vigilancia más robustos e integrales tienden a presentar un mejor desempeño institucional, menores niveles de percepción social de corrupción y condiciones más favorables para la cohesión social y la eficiencia económica. No obstante, a pesar de estas experiencias positivas, América Latina enfrenta aún desafíos estructurales persistentes, vinculados a la debilidad institucional, la inestabilidad política y la limitada participación ciudadana, que continúan restringiendo el alcance y la efectividad de las estrategias anticorrupción en la región.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió analizar los efectos sociales y económicos de la vigilancia anticorrupción en los servicios públicos de América Latina, evidenciando que la calidad de los mecanismos de control institucional constituye un factor determinante para el desempeño del sector público y la confianza ciudadana. A partir del análisis regional y del examen comparativo de los casos de Chile y Uruguay, se identificaron diferencias significativas en la efectividad de la vigilancia anticorrupción dentro de la región.

En términos sociales, los resultados muestran que la debilidad de los sistemas de vigilancia anticorrupción en gran parte de América Latina se asocia con altos niveles de percepción de corrupción, lo que impacta negativamente en la legitimidad de las instituciones públicas y en la cohesión social. La persistente desconfianza hacia actores clave del Estado, como gobiernos locales, fuerzas de seguridad y representantes electos, evidencia que la corrupción no solo constituye un problema administrativo, sino también un fenómeno social que afecta la relación entre el Estado y la ciudadanía. Desde una perspectiva económica, la investigación confirma que la falta de control efectivo sobre la gestión pública genera ineficiencias en el uso de los recursos estatales, afectando la calidad y cobertura de los servicios públicos. En contraste, los países que presentan mayores niveles de vigilancia institucional, como Chile y Uruguay, muestran mejores resultados en la asignación de recursos, mayor estabilidad institucional y condiciones más favorables para la inversión pública y privada.

Asimismo, el análisis del caso uruguayo pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana, la transparencia y el seguimiento institucional como elementos clave para fortalecer la vigilancia anticorrupción. La evidencia sugiere que los mecanismos de control resultan más efectivos cuando se articulan con una sociedad civil activa y con sistemas de rendición de cuentas accesibles y sistemáticos. De manera general, el estudio concluye que la vigilancia anticorrupción constituye una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible en América Latina, cuyos efectos trascienden el ámbito jurídico y administrativo. Fortalecer estos mecanismos no solo contribuye a reducir prácticas corruptas, sino que también promueve una gestión pública más eficiente, equitativa y orientada al bienestar social.

Finalmente, se destaca la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que integren independencia institucional, profesionalización del servicio público y participación social, como condiciones fundamentales para consolidar sistemas anticorrupción efectivos. Si bien existen avances en algunos países, los desafíos estructurales aún presentes en la región hacen imprescindible continuar investigando y fortaleciendo los mecanismos de vigilancia como base para mejorar la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía latinoamericana.

REFERENCIAS

- [1] A. T. Nieto, J. N. Amézquita, and M. Vásquez, "Governance of metropolitan areas for delivery of public services in Latin America," *Region*, vol. 5, no. 3, pp. 49–73, 2018.
- [2] M. Neshkova and V. Kalesnikaite, "Corruption and citizen participation in local government: Evidence from Latin America," *Governance*, vol. 32, no. 4, pp. 677–693, 2019.
- [3] M. Baltabayevich, "The importance of public oversight in combating and preventing corruption," *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, no. 47, pp. 66–73, 2025.
- [4] G. C. Cárdenas, S. G. Gámez, and A. S. Suárez, "A synthetic indicator of corruption for Latin America: A global vision," *Competitiveness Review: An International Business Journal*, vol. 28, no. 2, pp. 194–212, 2018.
- [5] N. Dassen, J. Vieyra, E. Molina, Á. Ramírez, L. Díaz, S. Elena, E. Casadei, A. N. de Barros, T. Alvim, O. Bellettini, R. De Michele, M. Restrepo, S. Tschorne, and J. Riaño, *Open Government and Targeted Transparency: Trends and Challenges for Latin America and the Caribbean*. Washington, DC, USA: Inter-American Development Bank, 2012.
- [6] Z. Daniel, "Corruption in two Latin American nations: The experiences of Brazil and Chile in comparative analysis," in *Corruption in Two Latin American Nations*. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited, 2021, vol. 34, pp. 79–98.
- [7] M. Mahpuдин and R. Hidayati, "Enhancing anti-corruption literacy and strengthening the strategic role of youth organizations in government oversight in Serang City," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 551–559, 2025.
- [8] R. Dzhumashev, "Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development," *Economic Modelling*, vol. 37, pp. 202–215, 2014.
- [9] M. Kamto, "Reaffirming public-service values and professionalism," *International Review of Administrative Sciences*, vol. 63, no. 3, pp. 295–308, 1997.
- [10] C. Cruz-Rubio, "Políticas anticorrupción: ¿qué puede funcionar para combatir la corrupción sistémica en América Latina? Respuestas sistémicas de gobierno abierto e integridad pública," in *Solidaridad e instituciones en América Latina*. Madrid, España: Fundación Carolina, 2025, pp. 40–55.
- [11] A. Paterson, F. Changwony, and P. Miller, "Accounting control, governance and anti-corruption initiatives in public sector organisations," *The British Accounting Review*, vol. 51, no. 5, p. 100844, 2019, art. no. 100844.
- [12] G. Mudacumura, "Accountability and transparency: Cornerstones of development and democratic governance," in *Public Administration, Governance and Globalization*. Cham, Switzerland: Springer, 2013, pp. 37–55.
- [13] J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann, and M. Schankerman, "Seize the state, seize the day: An empirical analysis of state capture and corruption in transition economies," World Bank, Policy Research Working Paper 2444, 2000.
- [14] M. Al-Faryan, "Agency theory, corporate governance and corruption: An integrative literature review approach," *Cogent Social Sciences*, vol. 10, no. 1, p. 2337893, 2024, art. no. 2337893.

- [15] N. Bautista-Beauchesne, "Building anti-corruption agency collaboration and reputation: Hanging together or separately hanged," *Regulation & Governance*, vol. 16, no. 4, pp. 1399–1419, 2022.
- [16] E. M. Uslaner, "Trust and corruption," in *The New Institutional Economics of Corruption*. London, UK: Routledge, 2004, pp. 90–106.
- [17] V. Tanzi and H. Davoodi, "Corruption, public investment, and growth," in *The Welfare State, Public Investment, and Growth*. Tokyo, Japan: Springer Japan, 1998.
- [18] A. Carballo, "Poverty and corruption in Latin America: Challenges for a sustainable development strategy," *Revista Opera*, no. 10, pp. 41–65, 2010.
- [19] A. Halai, V. Halai, R. Hrechaniuk, and K. Datsko, "Digital anti-corruption tools and their implementation in various legal systems around the world," *SHS Web of Conferences*, vol. 100, p. 03005, 2021, art. no. 03005.
- [20] World Bank, "Worldwide governance indicators," En línea, Washington, DC, USA, 2023, disponible en: <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>.